

Hacia la construcción de un Protocolo de Atención Integral a Mujeres en situación de violencia política.

Dora Rodríguez Soriano¹.

Resumen

Uno de los efectos adversos de la observancia al principio constitucional de paridad de género en los procesos electorales y la creciente participación de las mujeres en el ámbito político, ya sea como aspirantes a un cargo de elección popular o bien, en el desempeño del cargo, es la violencia política.

Sin duda se han dado avances significativos para visibilizar esta expresión de discriminación contra las mujeres, en primer lugar, para dimensionarla, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con un registro de 2,310 expedientes, de los que han derivado 1,881 sentencias.

En segundo lugar, al haber emitido un Protocolo de Atención en 2016 y actualizado en 2017, se emitieron criterios, tesis y jurisprudencia que garantizó a las mujeres que enfrentaron violencia en el ámbito político, el acceso a la justicia, aun antes del decreto publicado en el año 2020, mediante el cual se reformaron siete leyes y por la cual se tipificó la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Recientemente, algunos estudios evidenciaron los daños a la salud física y psicológica de las víctimas de violencia política; de manera paralela, se han diseñado protocolos de actuación para la atención de las mujeres. El presente trabajo tiene el objetivo de realizar una revisión de estos protocolos para analizar en qué medida corresponden, por un lado, a la normativa en la materia y, por otro lado, a los daños y necesidades que presentan quienes la han enfrentado.

¹ Doctora en Sociología por el ICSyH de la BUAP y Doctorante en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral Del Tribunal Electoral de Jalisco. Académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Correo electrónico: drs19683@gmail.com

En suma, se pretende analizar en qué medida estos protocolos cumplen con lo previsto en las diversas leyes y normas aplicables y si logran dar respuesta a las necesidades de atención de las mujeres afectadas.

Palabras clave: violencia, política, protocolo, prevención, atención.

Introducción.

México ha observado avances vertiginosos por demás significativos en materia de paridad de género, a partir de la reforma político electoral de 2014, en la que se elevó a principio constitucional a aplicar en la postulación a los cargos de elección popular y más adelante, en el año 2019 al ser publicado el decreto de reforma constitucional conocido como “paridad en todo”, por el que se modificaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 para fortalecer el marco legal que garantizara una participación paritaria en los procesos electorales federales y estatales.

Esta acción para reforzar el marco legal derivó en una persistente resistencia por parte de algunos partidos políticos para aplicar estas nuevas disposiciones y un recrudecimiento de la violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito político. Ante este escenario, se multiplicaron los esfuerzos para establecer medidas para hacerle frente, entre ellas, las derivadas de los órganos jurisdiccionales como lo fue el Registro de Personas Sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres y el diseño protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia política.

En el presente trabajo se propone realizar una revisión de los protocolos de atención a la violencia política contra las mujeres que ha emitido el INE con el fin de analizar en qué medida responden, por un lado, a las necesidades de las mujeres y, por otro lado, si se encuentran armonizados con los principales instrumentos con los que se cuenta en nuestro país en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.

Se parte de la definición de violencia política contra las mujeres para posteriormente señalar lo que prevé el marco legal en la materia, a raíz de la reforma publicada el 13 de abril de

2020 que modificó seis leyes generales y dos orgánicas², orientadas a contribuir en el acceso a la justicia a las mujeres en materia electoral, penal y de responsabilidades administrativas, otorgando responsabilidades a las autoridades federales y de las entidades federativas tanto jurisdiccionales como administrativas.

Posteriormente se describirá el contexto de violencia política en el que las mujeres han tenido que competir en las contiendas en los últimos años, sus necesidades, los daños en su salud física y psicológica, así como patrimoniales y económicas, entre otras. Finalmente se hará un análisis para identificar en qué medida estos protocolos responden a estas necesidades y al marco legal en nuestro país, a la luz específicamente de las particularidades que involucra la violencia política contra las mujeres; señalando en las reflexiones finales los retos que se enfrentan de cara al Proceso Electoral Concurrente 2023- 2024.

Postura sobre el concepto de violencia política contra las mujeres.

Como sabemos, los primeros antecedentes de la definición de la violencia política contra las mujeres los identificamos con la Asociación de Consejales de Bolivia (ACOBOL), quienes definieron estas conductas como

las acciones, conductas y agresiones que causen daño físico, psicológico o sexual que tengan como propósito reducir, suspender, impedir o restringir el ejercicio de las funciones de su cargo a una mujer política, o inducirla, en contra de su voluntad, a actuar de una manera particular, o dejar de hacerlo, en relación con su mandato político.

Otras autoras como..

² Se reformaron: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General En Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres publicado en 2016 señala que

(...) comprende todas aquellas acciones y omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político- electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. (TEPJF, 2016, p. 23)

A raíz de que la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política actualiza el concepto en los siguientes términos:

(...) abarca así toda manifestación de violencia en la vida política dirigida contra las mujeres por el hecho de serlo, o que afecta a las mujeres desproporcionadamente, cuyo objetivo o resultado es impedir total o parcialmente a las mujeres gozar de sus derechos políticos. Así, esta violencia se produce por el hecho de ser mujer y participar en el espacio público y político, teniendo presente que no es el espacio físico donde se realiza la violencia el que la define, sino las relaciones de poder que se producen en ese espacio. (OEA, MESECVI, 2017: 15)

En 2017 se actualizó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres y una de las modificaciones consistió en construir un concepto consensado entre las instituciones que participaron en el diseño del protocolo, tratando de homogeneizar su utilización y fortalecerlo con los referentes internacionales, nacionales y jurisprudenciales que se habían producido en 2016 (Rodríguez, 2020), como fue el caso de la jurisprudencia 48/2016 que establece que son

todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus

derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

Por lo que el TEPJF en el protocolo referido emitido en 2017 definió la violencia política contra las mujeres como

Comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género³), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo⁴”. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida⁵.

La definición establecida en el marco de la reforma de 2020

es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. (LGIPE, Art. 3, inc. K)

³ [...] retomado de la definición de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, en virtud de que complementa y fortalece la definición del presente protocolo. TEPJF, 2017.

⁴ Jurisprudencia 48/2016 del TEPJF. VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES.

⁵ [...] retomado de la definición de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, en virtud de que complementa y fortalece la definición del presente protocolo. TEPJF, 2017.

Identifico una tensión en el concepto, al haberse agregado la acepción “en razón de género”, en primer lugar, porque toda la violencia ejercida contra las mujeres, tiene como condición que es posible porque es mujer. En segundo lugar, porque de un análisis que se desprende de comparar el número de medios de impugnación presentados ante el TEPJF y las sentencias que actualizan la violencia política contra las mujeres en razón de género, se observa que existe una desproporción significativa como más adelante se detalla.

Lo pertinente es contar con un concepto que permita dar cuenta de la grave problemática que las mujeres están enfrentando de manera creciente en su legítimo interés y derecho para participar en la vida pública de su país. En ese aspecto me parece que hay un gran tramo por recorrer porque del conjunto de quejas, medios de impugnación que se presentan ante las instancias competentes, una cifra significativa es desechada en virtud de que las conductas denunciadas no cumplen con los elementos que contiene el concepto.

La tensión en el concepto se identifica debido a que el agregado “en razón de Género” se orientó a dotar de contenido a la Violencia Política contra las Mujeres, no obstante, representa una serie de limitaciones para quienes recurren ante la imposibilidad de aportar los datos que permitan cumplir con el test para que sea considerada como Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Freidenberg, (2017) en su artículo La violencia política hacia las mujeres: el problema, los debates y las propuestas para América Latina, problematiza el concepto con la idea de señalar que no todas las agresiones que sufre una mujer en el ámbito político puede ser considerado como violencia política contra las mujeres en razón de género, lo cual me parece adecuado para intentar evidenciar exactamente a que nos referimos cuando hablamos de esta problemática.⁶ No obstante, me parece pertinente preguntar si no es violencia política en

⁶ Freidenberg, Flavia y Valle Pérez, Gabriela Del, Ed. 2017, La violencia política hacia las mujeres: el problema, los debates y las propuestas para América Latina En: Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra violencia política hacia las mujeres en América Latina. México. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

razón de género, ¿qué es? La respuesta garantizaría a las mujeres el acceso a la justicia cuando recurre por conductas ejercidas en su contra que limita sus derechos político electorales.

Coincido con Krook y Restrepo (2015), en que las mujeres cuando participan en la política, se enfrentan a conductas de violencia, son discriminadas por ser mujeres. En la misma línea, coincido con Piscopo, quien señala que “la condición de ser mujer” es un elemento difícil de determinar; por eso he sostenido que se debe construir un concepto de violencia política que se refiera a estos actos y propongo que sea una agravante el hecho de que se utilicen _además_ _símbolos que aludan a los estereotipos y roles de género tradicionales y culturalmente asignados a las mujeres.

De lo antes descrito, sostengo que la definición debe dar cuenta de lo que ocurre en la realidad y no tratar de “moldear” la realidad a un concepto, que, dada esta situación, está generando impunidad e impidiendo a las mujeres, el acceso a la justicia. La violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito político como en todos los ámbitos en que se desarrolla, la ejercen por su condición de mujer. En ese sentido, es necesario replantear el concepto a la luz del análisis de las sentencias de los órganos jurisdiccionales.

La Reforma de 2020.

La reforma de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, modificó seis leyes, respecto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se incorporó esta modalidad, su definición y las conductas (las acciones u omisiones) que la constituyen.

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se prevén las conductas constitutivas de delitos electorales, el procedimiento y las sanciones correspondientes. Destaca el hecho de que otorga facultades a las autoridades electorales federales y locales para solicitar a las autoridades competentes medidas de protección, análisis de riesgo; emitir medidas cautelares específicas en materia de violencia política en razón de género, así como ordenar medidas de reparación.

Respecto a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se establecen las agravantes por la comisión de delitos electorales, cuando su comisión involucre violencia política en razón de género y señala el Juicio para la protección de los derechos políticos (JDC) como el medio para conocer este tipo de conductas de violencia política en razón de género.

Por otra parte, se adiciona a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la obligación de dicha institución de crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política en razón de género y otorga al Ministerio Público, la facultad de emitir medidas de protección cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima⁷.

En ese contexto el Instituto Nacional Electoral aprobó ordenamientos para cumplir con estas atribuciones, entre otros, la Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral⁸, el Protocolo del INE para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género⁹ y de manera más reciente, el Protocolo Modelo para los Organismos Públicos Locales Electorales para la

⁷ Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; 11. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; 111. Separación inmediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;

⁸ Documento aprobado por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, mediante acuerdo INE/CIGYND/002/2021 de fecha 25 de febrero de 2021. Consultable en la liga electrónica <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/118202>.

⁹ Documento aprobado por el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG137/2022 emitido en sesión ordinaria del 25 de febrero del 2022. Consultable en la liga electrónica https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2022/03/cigynd_2se_180222_p1_Acuerdo.pdf

Atención de Primer Contacto a Víctimas y la Identificación de Factores de Riesgo en los casos de Violencia Política contra las Mujeres¹⁰.

Las dimensiones de la violencia política contra las mujeres en México en los años recientes, sus efectos en la salud de las mujeres y los daños patrimoniales y económicos. Sus necesidades y obstáculos para enfrentarla.

El TEPJF ha registrado 2,310 expedientes de asuntos relacionados con violencia política contra las mujeres en un plazo del 4 de noviembre de 2016 al 30 de abril de 2023, de las cuales se han derivado 1,881 y el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que tiene a su cargo el Instituto Nacional Electoral indica que al corte del 12 de septiembre de 2023, un total de 344 personas registradas y 304 sancionadas, de las cuales 58 son mujeres y 246 hombres (INE, 2023)¹¹. De lo que se desprende que existe una desproporción significativa entre el número de expedientes que se integran en el TEPJF por este tipo de conductas denunciadas por mujeres que participan en la política y el número de registros de personas sancionadas.

Un estudio realizado por el colectivo feminista “Luchadoras” en el Proceso Electoral Concurrente 2018 sobre violencia política a través de las tecnologías contra las mujeres, señaló que se presentaron 85 agresiones a mujeres que participaban en el proceso en 24 entidades “La ciudad de México y Puebla fueron los estados en que se reportaron más agresiones contra candidatas (9), seguidos de Aguascalientes y Querétaro (5), así como Chiapas y Oaxaca”¹². Asimismo, 62 candidatas fueron agredidas en redes sociales, de las

¹⁰ Acuerdo INE/CIGYND/002/2023. Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, por el cual se aprueba el Protocolo Modelo para los Organismos Públicos Locales Electorales para la Atención de Primer Contacto a Víctimas y la Identificación de Factores de Riesgo en los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Consultable en la liga electrónica: https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2023/08/ACUERDO_CIGYND_002_PROTOCOLO_MODELO_OPLE_VF.pdf

¹¹ INE, 2023, Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Consultable en: <https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/>

¹² Animal político, 24 de abril de 2018. Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/2018/10/candidatas-violencia-politica-tecnologias/>

cuales, el 30 % postulaban para ser alcaldesas, el 29 % para diputadas locales, 18 % para diputadas federales (18%), 8 % para senadoras o 5 % para gobernadoras, pero en el informe también reconocen que existe una subregistro importante porque no todas las mujeres que padecieron actos de violencia, acudieron a presentar una queja o denuncia.

Los principales actos de violencia perpetradas contra ellas fueron a través de facebook, twitter, youtube e instagram mediante expresiones de discriminación (41%), amenazas (20%), desprestigiarlas (16%), suplantación o robo de identidad (7%), y difusión de imágenes íntimas (2 %), por acoso y extorsión (2%), difusión de información personal sin consentimiento y monitoreo y acecho (1%). El informe señaló además que:

“las agresiones contra las candidatas fueron cometidas a través de WhatsApp (29%), llamadas telefónicas (30%), medios (17%), televisión (8%), mensajes de texto (8%), ruedas de prensa (4%) y fotografías (4%)”¹³.

Por su parte, la Dra. Pérez (2018) desarrolló un estudio para documentar casos de violencia política de mujeres aspirantes a un cargo de elección popular, funcionarias públicas y mujeres en el desempeño del cargo para el cual fueron electas en entidades como Guerrero, Tlaxcala, Querétaro entre otras.

Pérez (2018) es una de las autoras que empezó a identificar los daños que experimentan las mujeres derivados de la violencia política de la que son sujetas, entre los síntomas y síndromes que documentó se encuentran: problemas de salud físicas, diversos trastornos como ansiedad, y de la alimentación: depresión, estrés post traumático, síndrome de inhabilidad aprendida, baja autoestima, aislamiento, problemas para relacionarse con familiares y propuso una *Guía Psicoemocional para identificar y tomar acción en casos de violencia política de género*¹⁴.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Pérez Vázquez, Teresa. Coord. IGUALDAD Y JUSTICIA: La violencia política por razones de género durante el proceso electoral 2018 en México. CIPE/PNUD.

También se ha documentado que la principal causa por la que se desechan los medios de impugnación que presentan las mujeres por violencia política ante los órganos jurisdiccionales se debe a deficiencias en la integración de las demandas, porque no cuentan con una adecuada asesoría legal, por la falta de recursos para pagar los honorarios de una abogada o abogado y el desconocimiento de la ley y de los procedimientos para su defensa.

Es frecuente que las mujeres que enfrentan violencia política eroguen recursos propios para solventar los gastos de traslado y de los trámites para presentar un medio de impugnación por los actos de violencia de que son sujetas. Por lo que se identifican daños físicos, psicológicos, en su patrimonio y economía y derivado de estos perjuicios, requieren de atención médica y psicológica especializada, acorde al ámbito político en que la experimentan.

Los protocolos

Como ya se señaló, el Instituto Nacional Electoral ha aprobado diversos protocolos, en este estudio, solo se hará el análisis del *Protocolo del INE para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género* y el *Protocolo Modelo para los Organismos Públicos Locales Electorales para la Atención de Primer Contacto a Víctimas y la Identificación de Factores de Riesgo en los casos de Violencia Política contra las Mujeres*.

El primero ofrece una ruta para elaborar un análisis de riesgo y un plan de seguridad en la atención a las mujeres que denuncien ante los organismos electorales administrativos, por violencia política y del cual se desprenden las siguientes observaciones:

1. Si bien ya se prevé la atención psicológica a las víctimas de violencia política, entre la que se cuentan, los primeros auxilios psicológicos, no se señala quien puede brindar esa atención (perfil profesional, capacitada en la materia). Es importante señalar que para este efecto es necesario contar con una estrategia de capacitación en el INE y los OPLE.
2. Entre los documentos que se retomaron para elaborar el mencionado Protocolo, no se encuentran dos de los referentes fundamentales para la atención médica y psicológica a

víctimas de violencia de género que ha emitido la Secretaría de Salud: la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención¹⁵, así como el Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual¹⁶, emitidos por la Secretaría de Salud que constituyen referentes de observancia obligatoria para las instituciones del sector salud, quienes deben proporcionar la atención integral, entre ellas, médica y psicológica.

3. Un pendiente en materia reglamentaria en México, es que ambos instrumentos deben ser actualizados y armonizados a la reforma de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres, así como sus lineamientos de atención psicológicas y por supuesto, su sistema de registro, en virtud de que son las instituciones del sector salud, las encargadas de brindar esta atención a las víctimas.

4. El referido protocolo menciona que se debe contar con un directorio actualizado de los hospitales, instituciones de salud (física, psicológica y/o psiquiátrica) o profesionales de la salud que atiendan a mujeres por violencia de género por entidad”, lo cual supone una adecuada gestión con las unidades de salud que brindan atención a mujeres en situación de violencia.

5. En la medición del riesgo, es importante incluir que se trata de una medición que puede no ocurrir como se prevé, es decir, que de un grado de violencia leve, pueda transitar a un grado extremo o alto de violencia, por lo que debe estar alerta.

6. Por otro lado, las medidas de protección deben ser acordes al perfil de las mujeres que participan en el ámbito político (aspirantes, precandidatas, candidatas, candidatas electas en

¹⁵ SSA, 2005, NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN. SECRETARÍA DE SALUD. MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-190-SSA1-1999, PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD. CRITERIOS PARA LA ATENCION MEDICA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, PARA QUEDAR COMO NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION.

¹⁶ SSA, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 2009, Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, Consultable en la liga electrónica: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50089/MODELO_INTEGRADO_2009__print_.pdf

el desempeño del cargo; funcionarias de partidos políticos, espacios en los que es ineludible la cercanía en sus áreas de trabajo en los que se realizan actividades propias de la función que desempeñan.

En el segundo caso, el protocolo se refiere a la atención de primer contacto a mujeres víctimas de VPMRG y establece el procedimiento para la emisión de medidas de protección cuando está en riesgo su vida o su integridad física y/o emocional, estas dictadas previo análisis de riesgo elaborado por un grupo multidisciplinario y del cual desprendo las siguientes observaciones.

1. Se reitera la omisión de no considerar tanto la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, así como el Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, que como ya se señaló son de observancia obligatoria para las instituciones del sector salud, quienes deben proporcionar la atención integral, entre ellas, médica y psicológica.

2. Se observa que lo que se denomina una atención de primer contacto a mujeres víctimas de VPMRG, se trata de una fase en la atención de las mujeres y no de una técnica como se describe en el protocolo.

3. Entre los objetivos se establece que se pretende Implementar un procedimiento homologado para la atención del primer contacto que se tenga con las mujeres que requieran orientación o presenten alguna queja o denuncia ante los OPLE por VPMRG, no obstante, es fundamental una intervención coordinada y concertada con las instituciones involucradas, que no se ha realizado, es decir, el protocolo se elaboró sin la participación del conjunto de instituciones implicadas en la atención. En consecuencia, la canalización a otras instituciones debe ser concertada de manera previa.

4. El personal que brinde la atención de primer contacto debe contar con un perfil ad hoc, para las funciones que desempeñará en la atención a las víctimas, no sólo con los conocimientos, sino con un entrenamiento especializado en la materia. Estos son algunos de los pendientes identificados en los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia política que no han sido suficientemente incorporados y con la especificidad requerida.

Reflexiones finales.

A manera de reflexiones finales se debe decir que los protocolos emitidos por el INE deben ser analizados y armonizados con los instrumentos reglamentarios con los que se cuenta en el sector salud, que está completamente involucrado en la atención integral. Los protocolos deben responder a las necesidades y problemáticas que enfrentan las mujeres en el ámbito político: asesoría legal y acompañamiento gratuito; atención médica y psicológica especializada por profesionales en la materia y es necesario que exista una instancia que vigile el cumplimiento de la ley y sirva como mecanismo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

Bibliografía.

Animal político, 24 de abril de 2018. Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/2018/10/candidatas-violencia-politica-tecnologias/>

Freidenberg, Flavia y Valle Pérez, Gabriela Del, Ed. 2017, La violencia política hacia las mujeres: el problema, los debates y las propuestas para América Latina En: Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra violencia política hacia las mujeres en América Latina. México. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tribunal Electoral de la Ciudad de México

INE, 2023, Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Consultable en: <https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/>

INE/CIGYND/002/2023. Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, por el cual se aprueba el Protocolo Modelo para los Organismos Públicos Locales Electorales para la Atención de Primer Contacto a Víctimas y la Identificación de Factores de Riesgo en los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Consultable en la liga electrónica: https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2023/08/ACUERDO_CIGYND_002_PROTOCOLO_MODELO_OPLE_VF.pdf

Pérez Vázquez, Teresa.2018, Coord. IGUALDAD Y JUSTICIA: La violencia política por razones de género durante el proceso electoral 2018 en México. CIPE/PNUD.

TEPJF, 2016, Jurisprudencia 48/2016 del TEPJF. VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES.